



Un matrimonio por conveniencia

El reciente encuentro entre la cúpula empresarial del país y el gobierno parece haber develado una nueva forma de corporativismo en el país en el que ambos actores participan con derechos de exclusividad para beneficiarse mutuamente. Esta ha sido una relación construida a lo largo de los años y ya lleva una historia detrás en la que, como en un matrimonio por conveniencia, se pueden ver lunas de miel, desencuentros y reconciliaciones, pero no un divorcio definitivo a fin de preservar los intereses mutuos. ¿Cómo se construyó esta relación?, ¿qué carac-

terísticas tiene? Y ¿qué futuro se puede esperar de ella? Y, más importante aún, ¿qué gana la sociedad nicaragüense con esa alianza? Esas son algunas de las interrogantes que se hace todo el país.

Una historia de larga data

Desde la teoría hasta las realidades más concretas y particulares, la relación entre el gobierno y el capital siempre es un tema de interés general por las implicaciones sociales, políticas y económicas que conlleva. En el caso de Nicaragua, esa relación no es reciente, tiene largos antecedentes llenos de con-

flictos y tensiones como en la época de la dictadura somocista y la Revolución Sandinista. Pero a pesar de los conflictos y tensiones, siempre hubo canales de comunicación entre ambos actores, y algo más.

Para hablar del pasado reciente, los vínculos entre el gran empresariado y el FSLN se fueron construyendo sobre la base de las alianzas económicas y comerciales, y los lazos de consanguinidad establecidos a través de la conformación de familias que entraron a engrosar las élites políticas y económicas del país. Durante los últimos años esa relación

ha experimentado algunos cambios importantes hasta llegar al acuerdo actual y sus rastros se encuentran en la época que la nomenclatura del partido comenzó a conformar grupos de poder económico a inicios de la década de los 90.

Para el FSLN esas relaciones siempre fueron necesarias. Durante la década de los 80, le dieron un nivel mínimo de inversión privada al país, cierta viabilidad y legitimidad política al proceso revolucionario, especialmente de parte del grupo de los llamados empresarios patrióticos. En la década de los 90, las buenas relaciones entre el gobierno y el capital eran tan necesarias como para el FSLN. Para el gobierno porque se suponía que ellos eran la palanca que dinamizaría la economía en el esquema neoliberal de reformas y ajustes estructurales. Mientras que para el FSLN, eran importantes porque ciertos grupos de recién conformados empresarios sandinistas necesitaban insertarse en el nuevo esquema de economía de libre mercado capitalista. Por el lado del empresariado, también la relación era necesaria en tanto les permitiría recomponerse económica y políticamente tras el establecimiento del modelo económico neoliberal de la época. Es decir, podrían hacer negocios.

Del 2007 hasta hoy esa relación todavía es necesaria tanto por interés económico como por interés político. Durante los primeros años del gobierno Ortega el gran empresariado privado fue neutralizado políticamente a través de un proceso de construcción de alianzas empresariales entre el grupo Ortega-Murillo y el gran capital nacional. Después la relación se convirtió en un matrimonio por conveniencia, pero como en muchos de ellos, los integrantes de la pareja no son iguales. Hay una relación de poder que condiciona el matrimonio, somete a una de las partes al abuso pero se termina aceptando la subordinación en virtud de preservar los intereses particulares. No hay inocencia ni ingenuidad en ello, sino complicidad.

Del corporativismo al neocorporativismo

La teoría política ha estudiado abundantemente al corporativismo como un fenómeno político y econó-



mico de las sociedades capitalistas modernas, especialmente aquellas con Estados de bienestar en el cual se produce una ampliación de los derechos y beneficios de los ciudadanos. Simplificando esas teorías, el modelo corporativista clásico está constituido por tres actores fundamentales: el Estado, el capital y los trabajadores. Su función principal es mantener un espacio de negociación política y social permanente alrededor de los beneficios y derechos, especialmente los laborales, a fin de mantener el “equilibrio” entre los márgenes de ganancia del capital y la satisfacción de necesidades para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, preservar tanto los intereses particulares de un actor y otro. En este esquema, el papel del Estado era clave en tanto se constituía en el mediador de los conflictos entre los intereses de los capitalistas y los trabajadores.

El modelo funcionó con bastante eficiencia especialmente en las sociedades europeas hasta la entrada del neoliberalismo cuando tuvo que recomponerse y dar paso a lo que actualmente se conoce como el neocorporativismo, que funciona básicamente con la participación del Estado, el capital y nuevas formas asociativas de ciudadanía más allá de las tradicionales organizaciones laborales de la época anterior. La incorporación de formas asociativas en el esquema responde a

razones que van desde las transformaciones en las formas de participación de los ciudadanos y el descrédito de los partidos como formas tradicionales de representación, hasta la propia conveniencia del modelo para los intereses del gran capital.

En Nicaragua, lo más parecido a un Estado del bienestar se estableció durante la Revolución y dio forma a una especie de corporativismo en el que participaban el empresariado patriótico y las organizaciones sindicales adscritas al proceso sandinista, junto con el gobierno de la época. El esquema cambió significativamente a partir de la década de los 90 cuando se transformó el modelo económico del país y los grupos del gran empresariado adquirieron una nueva importancia. Desde entonces hasta el 2007 se estableció una especie de neocorporativismo en el que participaban el gobierno, los grandes empresarios y numerosas formas asociativas surgidas del proceso democrático, las cuales aprovecharon los espacios semi abiertos de participación y el marco normativo creado en el país para intentar incorporar sus intereses y demandas en el sistema político, aunque sin éxito en la mayoría de los casos.

A partir del 2007, con la llegada al gobierno de Daniel Ortega, el esquema ha variado sustancialmente y aunque siempre participan tres actores,

ahora éstos son el capital transnacional que opera en el país, el gran capital nacional, que incluye grupos económicos de reciente conformación, el grupo Ortega-Murillo uno de ellos y el gobierno, que es casi igual que decir el grupo Ortega-Murillo. No figuran los trabajadores ni las otras formas asociativas del país. Un pequeño sector organizado oficialista participa solamente cuando se requiere legitimar y viabilizar acuerdos que en realidad son establecidos entre el capital y el gobierno. Así, el aseguramiento estatal de los derechos y beneficios laborales y sociales se ha transformado en la buena voluntad de la “responsabilidad empresarial” y el bono social para los más pobres.

El mecanismo para construir los acuerdos

El mecanismo que se ha estado utilizando para construir acuerdos entre el capital y el gobierno no es nuevo, en realidad es la reproducción de un modelo de transacciones desarrollado por las élites políticas del país durante las décadas pasadas y que tiene como momento culminante el Pacto Alemán-Ortega. La utilización de este esquema ha resultado sumamente efectiva y conveniente para los intereses del gran capital y sin duda, han realizado un proceso de aprendizaje que les ha permitido beneficiarse de él. Igual que en la esfera política, la naturaleza de las transacciones entre capital y gobierno tiene carácter privado y excluyente, y sus primeras expresiones se encuentran en las negociaciones que se realizaron a inicios de los 90 para adoptar las primeras medidas de ajuste estructural y reforma económica. De allí en adelante todas las decisiones que se han tomado hasta esta fecha han apuntado a beneficiar al capital transnacional y el gran capital nacional.

Con él se ha creado una intrincada madeja de vínculos entre élites políticas y económicas que no permiten diferenciar ni a los grupos ni a sus intereses. Esta convergencia de intereses ha sido enorme, especialmente durante este período del gobierno Ortega. Durante los llamados gobier-



nos neoliberales, las transacciones políticas y económicas dieron lugar a un modelo de gobernabilidad semi cerrado en el cual las élites negociaban entre ellas, las instituciones estatales estaban al servicio de los acuerdos y había una baja legitimidad del sistema y los actores políticos.

Ese modelo de gobernabilidad terminó por cerrarse en todos los sentidos con la llegada del gobierno Ortega. Pero el esquema de transacciones ha continuado funcionando siempre y cuando sea conveniente para que el gobierno pueda favorecer los intereses del grupo económico Ortega-Murillo y en segundo lugar, de sus aliados permanentes, el gran capital nacional y transnacional. El papel del Estado en este proceso ha sido clave porque ha sido el gran facilitador para que estos grupos económicos puedan operar en el país. Uno con más ventajas que los otros, pero beneficiándose mutuamente y protegiendo sus intereses aun cuando esa alianza suponga una relación de subordinación del capital al grupo Ortega-Murillo. Total, siempre pueden hacer negocios juntos o por separado.

Los grandes ganadores

¿Quién gana y quién pierde en esta alianza? Indudablemente, el más ganancioso de todos los grupos económicos que compiten en el país, es el grupo Ortega-Murillo. Primero porque cuenta con el respaldo de todos los recursos del poder y del Estado, y

en segundo lugar, porque se ha logrado constituir como interlocutor único del gran capital nacional y transnacional. Además, ha logrado domeñar los intereses de estos dos grupos y subordinarlos a los suyos propios.

El gran capital nacional no está conformado por un único grupo, de manera que entre ellos hay algunos que han ganado más que otros en esta alianza. Hay algunos de esos grupos que desde la época de la dictadura somocista lograron acomodarse a las condiciones del poder y han protegido sus intereses a toda costa. Esos han navegado al vaivén de las aguas y nunca han perdido, siempre se han mantenido en una posición ventajosa para hacer negocios y sacar ganancias. Aparentemente no participan en política porque no son visibles en ese plano, pero actúan a la sombra del poder y su opinión tiene un importante peso en las decisiones del gobierno y del sistema político. Al final, también cuentan con un importante recurso de poder que es la riqueza económica.

Otros grupos económicos menos consolidados o fuertes, pelean todavía entre ellos por ocupar un espacio privilegiado dentro de la economía y la política nacional. La mayoría de ellos también se han acomodado a esta alianza en virtud de proteger sus propios intereses del otro grupo económico poderoso y del gobierno. Pero para eso, la condición es taparse los ojos y los oídos ante las enormes desigualdades e injusticias que vive ellos



mismos y el resto de la sociedad nicaragüense. Estos grupos esperan ávidamente la oportunidad para ganar más poder e influencias, por eso tratan de mantenerse en los espacios cercanos al gobierno, al grupo Ortega-Murillo y el otro grupo económico de poder.

De ahí que no es extraño que tanto los unos como los otros, estén dispuestos a legitimar las condiciones políticas del país pues ellos también se benefician de ese estado de cosas, especialmente las políticas de control y contención social aplicadas por el gobierno para sofocar la oposición y el descontento de la ciudadanía.

Los grandes excluidos

Evidentemente, en la construcción de este gran acuerdo entre capital y gobierno las grandes excluidas han sido las organizaciones sociales y de trabajadores, otras formas de expresión de la sociedad civil y la mayoría de la sociedad nicaragüense. La exclusión, además de expresarse en el cierre de los espacios de diálogo y negociación, también se relaciona directamente con las consecuencias que los acuerdos privados capital-gobierno tienen sobre el proceso político del país y las condiciones de vida de la sociedad en general.

En las razones de la exclusión confluyen varios elementos. Uno

de ellos es la representación que el FSLN y sus organizaciones se arrogaron para negociar en nombre de los trabajadores, gremios y demás formas organizativas a inicios de los 90. Frente a gobiernos débiles o cómodos, este esquema resultaba menos complicado que negociar con diversas organizaciones, a diferentes niveles y con diferentes intereses.

El otro elemento se relaciona con la forma en que se han desarrollado las transacciones, su naturaleza privada y excluyente que dio lugar a un modelo de gobernabilidad semi cerrado hasta el 2007, y su desplazamiento hasta un modelo de gobernabilidad autoritario desde esa fecha hasta la actualidad, un esquema en el cual participan solamente la élites políticas y económicas del país y que excluye abiertamente a cualquier otro actor, especialmente aquellos que representan intereses mayoritarios de población.

Un tercer elemento está asociado a los acelerados y profundos procesos de informalización de la economía nacional y sus consecuencias expresadas en la alta tasa de desempleo del país que han contribuido a desarticular la capacidad organizativa de las organizaciones gremiales y sindicales, así como la capacidad de acción colectiva de las diferentes organizaciones y asociaciones ciudadanas.

La funcionalidad del modelo

Vista así las cosas, es evidente que este modelo corporativista entre capital y gobierno se ha constituido para realizar, extender y preservar los intereses de los grupos de poder económico, intereses que son, claramente privados, excluyentes y orientados a asegurar el beneficio económico de estos grupos.

El modelo es funcional ahora pero sus consecuencias para la economía, la política y la sociedad nicaragüense, tienen implicaciones en el presente y en el futuro. Consecuencias que serán dramáticas sobre las condiciones de vida de la población, los índices de pobreza y la continuidad de la marginación social y política de amplias mayorías en el país. La razón de este argumento tiene que ver con la coherencia que este modelo corporativista tiene respecto al neoliberalismo que predomina en la economía del país. Por mucho que los indicadores económicos se muestren favorables, que los organismos internacionales aprueben el desempeño del gobierno en materia de política económica y que los discursos oficiales del gran capital y el gobierno hablen de la bonanza y el crecimiento, lo cierto es que ese bienestar no llega y ni se desparrama sobre la sociedad nicaragüense. De manera que no hay ingenuidad ni inocencia en ello, pero sí cálculo político y económico.